

vigente, el cambio disciplinar de la incardinación, y de la posibilidad de que los fieles laicos participen en la organización y gobierno de la Iglesia.

4. Otro artículo recogido es «Trato de los presbíteros con los laicos» (pp. 165-189). El Concilio reflexionó sobre ello (cfr. «Presbyterorum ordinis», 9): La caridad debe ser la norma que presida tales relaciones, que se desarrollarán a partir del principio de «igualdad fundamental y diversidad funcional» (cfr. p. 168).

De entrada, por lo que se refiere al gobierno en la Iglesia, Lombardía afirma la estrecha ligazón del ejercicio de los «tria munera» con la sagrada ordenación (cfr. pp. 170-171).

Según el Código de 1917 las funciones de gobierno en la Iglesia estaban reservadas a los ordenados (cfr. p. 172). Tal planteamiento no le parece acertado a Lombardía ya que liga el desempeño del gobierno eclesiástico más a las personas (de los ordenados) que a la institución (cfr. p. 173). Por esto concluye: «no se puede identificar la jerarquía en sentido teológico —de la que se entra a formar parte mediante la ordenación— con la “organización oficial y pública”, prevista en la fundación misma de la Iglesia, “que es el centro de atribución de los fines públicos”» (p. 174).

Para Lombardía, la posición de los clérigos frente a los laicos (retomando la admonición evangélica: Mt 20,28, y conciliar «P.O.», n. 9) está en servir y no ser servidos. Los clérigos han de reconocer y promover la misión y dignidad de los laicos en la Iglesia, y la justa libertad que les compete en la ciudad temporal, que se considere la iniciativa

y deseos de los fieles, derecho a colaborar con la Jerarquía en el desempeño de algunos oficios eclesiásticos y de ejercer sus tareas propias sin necesidad de ninguna autorización jerárquica. Se han de reconocer y fomentar los carismas de los fieles.

En el artículo «Estatuto jurídico de los ministros sagrados en la actual legislación canónica» (pp. 219-245) recoge sustancialmente lo mismo que en el artículo anterior.

PEDRO JESÚS LASANTA

**P. LOMBARDÍA**, *Escritos de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. V, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona, 1991, 685 pp.

El volumen n. V de la colección «Escritos de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado» de Pedro Lombardía recoge distintos artículos, entre los que comentaremos algunos.

«Nuevo derecho canónico. La Iglesia renueva sus leyes» (pp. 11-100). Lombardía realiza un estudio anticipado de lo que sería el Código de 1983. Recoge cuatro conferencias pronunciadas en la Universidad Católica de Chile.

En primer lugar considera algunas de las actitudes que acompañaron (en favor) la codificación de 1917. Advierde que la eclesiología que rezuma es la propia de una Iglesia centrada en sí misma superando la crisis liberal (cfr. p. 15), y fuertemente centralizada en torno al Papa (cfr. p. 16).

Analizando el iter seguido desde el C.I.C. 1917 hasta el nuevo Código (a resultas de la reforma del concilio Va-

ticano II), Lombardía reflexiona en torno a los «principios directivos» que han configurado el Código de 1983, notando su influjo.

Luego considera la sistemática del nuevo Código, distinta del anterior, que arrancaba del Derecho Romano, y sistematizaba las materias jurídicas en torno a la conocida división: «las personas, las cosas y las acciones» (cfr. p. 23). El Código de 1983 se dividirá en cinco libros, y responde al espíritu del Concilio.

Lombardía valoraba el proyecto del Código de 1983 notando que su calidad técnica no era muy alta, hasta el extremo de contener algunos fallos (cfr. pp. 25-26). También mostró su preocupación por lo que se refiere a la receptividad del nuevo Código, dado el espíritu de desobediencia imperante y falta de disciplina. Por otra parte, el Código abre cauce a un desarrollo legislativo posterior diversísimo (cfr. pp. 26-28).

En la segunda conferencia, Lombardía abordó el estado en que se hallaba en aquel momento el Proyecto de Ley constitucional de la Iglesia. Hizo un desarrollo de la génesis del Proyecto de Ley Fundamental (con las controversias suscitadas) y los problemas que plantea: la imagen de la Iglesia que podía ofrecer, su valor como concreción de la constitución de la Iglesia... Apunta, igualmente, tres razones que explican que no haya prosperado tal Proyecto: cierto espiritualismo carismático que tiende a rechazar cuanto es derecho y norma en la Iglesia, la falta de la debida sensibilidad en favor de los derechos de los fieles, y cierto temor a que pudiera originar en el seno de la Iglesia una especie de anarquismo.

La tercera conferencia versó sobre «la Jerarquía eclesiástica y las personas naturales y jurídicas. La iniciativa privada en la Iglesia».

Lombardía destacó que es el Espíritu Santo quien conduce la Iglesia, y la enriquece con dones carismáticos y jerárquicos. El Concilio reconoce la acción del Espíritu Santo en los fieles laicos (cfr. pp. 60-61). Desde esta premisa es como se entiende la iniciativa privada en la Iglesia: ya que el Espíritu Santo actúa en las almas de los fieles, el Derecho de la Iglesia tendrá necesariamente una vertiente de derecho público, y otra de derecho privado. El ordenamiento canónico tiene que articular cauces jurídicos para ello (cfr. p. 61), de modo que se respete su autonomía y naturaleza propia, y no se confunda con la acción que desempeña la Jerarquía (p.e.: el derecho de asociación de laicos y clérigos). El fiel ha de ser respetado en sus derechos personales. Esto exige que se establezcan las necesarias garantías jurídicas (garantías legales, protección de los derechos tutelados judicialmente, tutela de la iniciativa privada).

Lombardía recoge la existencia de «personas jurídicas» en la Iglesia: «Se trata, en definitiva, de entidades abstractas, pero que corresponden, bien a un conjunto de personas que se consideran como un solo sujeto titular de situaciones jurídicas, o bien a un conjunto de bienes, es decir, un patrimonio que se personaliza, en tanto en cuanto que se destina a un específico fin por voluntad de los que lo aportan» (p. 65). La sistemática del Código de 1917 era diversa, contemplando la figura de las «personas morales» (ibi, y p. 66).

Los bienes de las personas jurídicas públicas se distinguen de los propios de

las personas físicas, perteneciendo oficialmente a la Iglesia-institución. Su finalidad es triple: culto, sustentación de ministros sagrados y pobres (cfr. pp. 66-67).

Respecto al Código de 1917, en relación a la titularidad de los bienes en la Iglesia, Lombardía señaló las innovaciones del Proyecto del nuevo Código: éste distingue entre «personas jurídicas públicas o privadas». Se constituyen con el carácter de «asociaciones» cuando integran personas para un determinado fin, o bien «fundaciones» cuando recogen una masa de bienes. Las personas jurídicas privadas se constituyen por la voluntad de las personas que las integran, quedando sujetas a la reglamentación de los estatutos que ellas se otorgan, precisando de la aprobación de la autoridad jerárquica. Las personas jurídicas privadas no se integran en la estructura oficial de la Iglesia, actuando en nombre propio. Las «asociaciones» constituyen una modalidad de las personas jurídicas, que también pueden revestir el carácter de «privadas», como expresión del ejercicio del derecho de asociación en la Iglesia. Su régimen jurídico es diverso de las asociaciones públicas (cfr. pp. 71-72).

Lombardía centró la cuarta conferencia sobre las «perspectivas de la reforma del derecho canónico matrimonial».

Señaló cuatro puntos fundamentales de reforma del derecho matrimonial canónico: remodelación de la naturaleza, fines y propiedades esenciales del matrimonio, simplificación de las normas sobre impedimentos matrimoniales, delimitación del derecho matrimonial común a toda la Iglesia y materias abiertas a una legislación particular, reforma

del defecto y vicios del consentimiento (cfr. pp. 77-78).

A lo largo de las páginas que siguen a continuación, Lombardía afrontó luego dos cuestiones principales. La primera, centrada sobre la remodelación de los textos fundamentales sobre el matrimonio, afrontando cuestiones como la descripción del matrimonio (alianza y contrato entre los esposos), el amor conyugal comprometido y comunidad de vida y amor (como «debido» entre los esposos), el principio de finalidad, las propiedades esenciales del matrimonio (unidad e indisolubilidad), y la sacramentalidad del matrimonio canónico (la alianza matrimonial elevada por Jesucristo a la dignidad de sacramento entre los bautizados: principio de inseparabilidad).

La segunda cuestión tratada se refiere al consentimiento matrimonial: defecto y vicios del consentimiento. El matrimonio es fruto del consentimiento recíproco, sin el cual no se da tal. No obstante, se presenta un problema: cuáles son las circunstancias óptimas en las que debe prestarse el consentimiento. Lombardía disertó sobre la capacidad para consentir, defecto del consentimiento y vicios.

En otro artículo afrontó: «Ley, costumbre y actos administrativos en el nuevo Código de Derecho Canónico» (pp. 103-133).

Lombardía advirtió que los lugares paralelos dedicados a la ley y a la costumbre en el C.I.C. 1917 y 1983 son muy semejantes. Lo que constituye una novedad en el Código de 1983 son los decretos generales e instrucciones, y los actos administrativos singulares (cfr. p. 103).

Advierte el Profesor que el concepto de «ley» en el nuevo Código responde al principio de legalidad: es aquella norma promulgada por la autoridad competente, en función del bien común y de la equidad (cfr. pp. 106-108). La ley canónica está limitada por el derecho divino, constituyendo éste su criterio de autenticidad y racionalidad. La ley y la costumbre se consideran fuentes del Derecho. De carácter administrativo son el rescripto, el privilegio singular, la dispensa, las instrucciones, los preceptos singulares y comunes, los decretos particulares y generales de ejecución, los estatutos y los «ordines» (cfr. p. 112).

Más adelante señala la relación entre ley y costumbre, viniendo ésta a depender de aquélla: el legislador puede reconocer el vigor de la costumbre mediante ley, sin que sea necesario que transcurran los plazos previstos (cfr. c. 26). La costumbre para que sea legítima ha de ser racional, siendo ineficaz si es contraria al Derecho divino y al nervio de la disciplina eclesíástica. La racionalidad de la costumbre debe estar en consonancia con el fin de la Iglesia: la «salus animarum». La costumbre reprobada es irracional y carece de eficacia normativa (cfr. pp. 120-122).

Luego trata de la potestad legislativa. Sus manifestaciones propias son: la ley, la costumbre, los decretos dictados por delegación del legislador y los actos singulares adoptados por quien tiene potestad legislativa (cfr. pp. 122-123). Para que sean válidos deben ser racionales.

Lombardía analiza, por último, algunos aspectos de la ley, la costumbre, la legislación delegada, actos singulares

de naturaleza legislativa y actos administrativos singulares, la dispensa.

En otro artículo abunda en el mismo orden de cosas: «Legge e consuetudine nel nuovo Codice» (pp. 151-154). Hoy, como en el pasado de la Iglesia, la costumbre es considerada como fuente del Derecho (cfr. p. 151). Sin embargo, el Código de 1917 reflejaba una especie de cautela ante la costumbre (cfr. p. 152).

Sobre la relación ley-costumbre, el Código de 1983 destaca la formalización de la ley en favor de la seguridad jurídica. No obstante, esto puede dar lugar a un tecnicismo legalista, contrario al espíritu tradicional del Derecho Canónico. El Código ha pretendido conjugar la potestad del legislador con la creatividad de las comunidades cristianas.

Luego trata de otra cuestión interesante: «Dualismo cristiano y libertad religiosa en el Concilio Vaticano II» (pp. 437-458).

Señala que el Concilio se sitúa en la vertiente del «dualismo cristiano» (que) tiene sus raíces en el Nuevo Testamento y fue formulado por vez primera, a finales del siglo V, por el Papa Gelasio I» (p. 439). No obstante, a lo largo de la historia se han producido diversos y distintos desajustes como el hierocratismo medieval y el regalismo de la Edad Media (cfr. p. 440). En la actualidad, los riesgos son de diverso género.

Hoy, «la captación de una “legítima laicidad del Estado”, de la que ya habló Pío XII, ha coincidido —incluso cronológicamente— con importantes progresos de la Ecclesiología, con el consiguiendo mejor conocimiento de lo que es la

Iglesia. El resultado de esta reflexión es una visión del dualismo, no como de dos ámbitos de poder y de competencias en el "mismo plano"; sólo la captación de las dos sociedades en dos órdenes distintos; en el orden sobrenatural la Iglesia, en el natural la comunidad política» (p. 442).

En efecto, el magisterio pontificio, con Pío XII, experimentó un cambio de orientación. Antes los Pontífices se dirigían a los Estados europeos de vieja tradición católica. Pío XII lo hará al universo mundo, desde el plano del derecho natural. Juan XXIII siguió este mismo talante: en su Encíclica «*Pacem in terris*» fundamentó los derechos humanos y la libertad religiosa, como una exigencia natural de la dignidad de la persona humana.

A resultas de esto, Lombardía señaló: «Aparece así, por vez primera en un documento pontificio, el tratamiento jurídico de la vida religiosa, no desde la perspectiva de los derechos de la Iglesia, vistos a la luz del Derecho divino positivo; sino sobre la base del Derecho natural, que reclama —como exigencia de la dignidad de la persona humana— la libertad religiosa; y ello, no en virtud de la veracidad de las creencias, sino como un derecho que tiene todo hombre, pese a estar expuesto al error» (p. 443).

Pedro Lombardía señaló que la posición de la Iglesia frente al Estado (en el concilio Vaticano II) responde al principio de «dualismo cristiano».

Como enseña la «*Lumen gentium*» (n. 36), Iglesia y comunidad política son sociedades de distinto orden. Los derechos que corresponden al hombre en cuanto ciudadano y fiel (pertene-

ciente a la sociedad política y a la Iglesia, al mismo tiempo) deberán armonizarse en atención a lo que prescribe la ley de Dios, que expresa la recta conciencia.

Y en la «*Gaudium et spes*» se recoge el principio de «autonomía de las realidades temporales» (cfr. n. 36), que significa autonomía frente a la Iglesia-institución, pero no frente a la ley moral de Dios impresa en dichas realidades, que lejos de desatender habrán de respetar adecuadamente para su recto desarrollo. Tales exigencias responden al orden natural, establecido por Dios en virtud del acto creador.

Las autoridades eclesásticas no tienen competencia para gestionar el gobierno temporal, aunque sí para enunciar los principios de doctrina social y emitir el correspondiente juicio moral cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas (cfr. «G.S.», 76). Este «juicio» de la Iglesia tiene un carácter moral y no jurídico, con un alcance espiritual (en razón de los medios evangélicos empleados: formulación doctrinal evangélica), y por dirigirse a las conciencias de los hombres, sin afectar por tanto a la autonomía de las realidades temporales (cfr. p. 447). De este modo, el «dualismo» ya no se reduce a la relación entre poderes diversos: «hay que captarlo desde la perspectiva de la persona abierta al mismo tiempo al orden sobrenatural y al orden temporal» (p. 455).

De este modo, no sólo se salvaguarda la autonomía del orden temporal, sino el legítimo pluralismo social y político que corresponde a los fieles católicos en la gestión de los asuntos temporales, siempre que el mismo se desen-

vuelva dentro de los límites exigidos por la fe y la moral (cfr. p. 448). Por ello, el Código de 1983 ha reconocido la libertad temporal de los laicos (cfr. c. 227).

Concretando todavía más, el Concilio afirma el dualismo cristiano en la «*Gaudium et spes*»: «Se encuentra (tal "dualismo cristiano") en el n. 76 de la Const. "*Gaudium et spes*": "La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y tiempo"» (pp. 448-449). Iglesia y Estado son independientes, ya que su naturaleza y finalidad es diversa. Pero ambas instituciones sirven al bien del hombre, por lo que habrán de colaborar entre sí. La Iglesia es competente para pronunciar «juicios morales» desde la perspectiva del derecho natural.

Lombardía señaló las dificultades que encuentra hoy el principio de «dualismo cristiano» en medio del Estado laico y pluralista, que se construye al margen de Dios y de la revelación cristiana. De ahí la necesidad de afirmar el derecho de libertad religiosa, tanto individual como colectiva. Se trata de una exigencia del derecho natural (cfr. p. 450).

El Concilio, en la Declaración «*Dignitatis humanae*» mostró la armonía entre el Derecho natural y las consecuencias del Derecho divino positivo al afirmar el derecho a la libertad religiosa (cfr. n. 2). De tal derecho se de-

riva la conclusión de que ha de ser reconocido en «igualdad» en favor de toda persona. No parece, en principio, que esto excluya cierta confesionalidad (cfr. pp. 452-453).

Por último, el Concilio abogó en favor de la libertad de la Iglesia, por ser institución divina y sociedad autónoma (cfr. p. 454).

Lombardía, en su artículo «Derecho eclesiástico y libertad religiosa» (pp. 137-148), consideraba en 1983, que el momento español era muy propicio para el desarrollo de los estudios de Derecho eclesiástico por el interés suscitado entre algunos universitarios, y porque las normas referentes a esta disciplina (contenidas en la Constitución de 1978) plantean problemas, que es preciso resolver (cfr. p. 138).

El Derecho eclesiástico del Estado es una disciplina que estudia la normativa legal emanada por el Estado sobre el factor religioso (cfr. p. 139). El italiano Scaduto fue quien fijó las líneas que lo configuran. Ruffini y Santi Romano trabajaron en esta orientación (cfr. pp. 141-143).

Por lo que se refiere a España, Lombardía señaló, que tras la aprobación de la Constitución, debía regularse el principio de libertad e igualdad religiosa de los ciudadanos (cfr. pp. 145-147).

PEDRO JESÚS LASANTA

**Ignacio MARTÍNEZ DE ALEGRÍA**, *La forma extraordinaria del matrimonio canónico. Origen histórico y régimen vigente*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1994, 538 pp.

El estudio de los problemas jurídicos planteados por la forma en el ma-